



REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Auto interlocutorio | 321 |
| Radicado | 05266-31-03-001-2020-00026-00 |
| Proceso | Verbal |
| Demandante | María Teresa Avendaño Zuluaga |
| Demandado | Almacenes Éxito S.A. |
| Asunto | No repone auto |

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO

Seis de octubre de dos mil veinte

Se decide el recurso de reposición instaurado por la entidad demandada, frente a la providencia del 10 de septiembre que pasó.

ANTECEDENTES:

1. El recurrente argumentó que si bien se accedió a la solicitud de la apoderada judicial de la parte actora, conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 82 del C.G.P; lo cierto es que dicha disposición, debe aplicarse de manera armónica con las demás normas señaladas en el estatuto general, esto es, la que contempla el deber de las partes de agotar el derecho de petición o, en su defecto, hacer uso de la exhibición de documentos.

Refirió que la prerrogativa prevista en la norma inicialmente citada, debe aplicarse a los documentos que el demandado no pudo obtener a pesar de haberlo solicitado mediante derecho de petición, pues admitir lo contrario, dejaría sin utilidad alguna la aplicación de las normas contenidas en el numeral 10 de los artículos 78 y 173.

Finalmente expuso que la apoderada faltó a su deber procesal (núm. 10, art 78) al no solicitar las pruebas en poder de la demandada y no hacer uso del derecho de exhibición de documentos bajo los parámetros exigidos en el artículo 265 de la normativa procesal.

2 Por su parte, durante el término de traslado, manifestó la apoderada de la parte demandante, que el ejercicio del derecho de petición se refiere es a los medios de prueba –documentales que tenga un tercero en su poder- y que sean relevantes para el debate probatorio o procesal; sinembargo, como en el *sub judice* los documentos se encuentran en poder de la demandada, es por ello que, en virtud del principio de lealtad procesal, solicitó que fueran aportados.

Arguyó que con el recurso interpuesto la parte realiza es maniobras dilatorias para obtener más tiempo para contestar la demanda, ya que lo expuesto como fundamento del recurso, obedece a una argumentación propia de una etapa probatoria y/o alegatos.

CONSIDERACIONES:

Consagra el artículo 82 del Código General del Proceso los requisitos formales que debe cumplir el escrito de demanda; dentro de éstos, la petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, “*con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que éste los aporte*” con la contestación; disposición que encuentra complemento en los artículos 90¹ y 96 *ibídem*².

Ahora bien, cabe preguntarse ¿Dicha facultad es aplicable para todos los documentos que requiera el demandante y que se encuentren en poder del demandado? Si bien las referidas estipulaciones normativas no advirtieron nada al respecto, la solicitud de dicho medio probatorio se circunscribe a que

¹“ (...) En la misma providencia el juez deberá (...) **ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante**”.

² “A la contestación de la demanda deberá acompañarse (...) los documentos que estén en su poder y **que hayan sido solicitados por el demandante, o la manifestación de que nos los tiene**”.

el demandante no haya podido aportarlos, pues ello obedece al principio de autorresponsabilidad de la prueba³.

En efecto, establecen los artículos 78, numeral 10, y 173 del Código General del Proceso, que la facultad de obtener dichos documentos, sólo resulta procedente cuando éstos se hubieren podido obtener de manera directa o por medio de derecho de petición.

No obstante, en el caso *sub lite*, el agotamiento de dicha carga hubiese resultado inane, en virtud de la naturaleza de la información requerida, al ser de connotación privada; obsérvese que lo pretendido por ésta obedece a documentos que se encuentran en el ámbito propio de la sociedad demandada, requiriendo en consecuencia la intervención de autoridad judicial para su otorgamiento⁴.

Finalmente, frente al argumento de que se debió solicitar la exhibición de los documentos, debe advertirse que, ante la ausencia de tarifa legal probatoria, podrán las partes valerse de cualquier medio de prueba, siempre y cuando éstas resulten necesarias, pertinentes y conducentes para la demostración de los hechos; de allí que la solicitud de dichos documentos podía realizarse por el medio probatorio que ésta eligiera.

Por lo expuesto, el Juzgado


RESUELVE:

³ Incumbe a las partes probar el supuesto de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, inciso 1 del artículo 167 del C.G.P.

⁴ Sentencia, T-114 del 2018: “La jurisprudencia de la Corte Constitucional define la información privada como aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto a quien le incumbe y, por ende, sólo puede accederse a ésta por orden de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones. La información personal comprende la relacionada con los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, la información extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetas a reserva. Se tiene que la información captada por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de una persona es indiscutiblemente privada. De igual manera, la información captada por los equipos de vigilancia instalados en establecimientos privados abiertos al público también tienen la naturaleza de privada, debido a que continuamente se encuentra registrando información de las personas que frecuentan este tipo de lugares”.

No reponer la providencia recurrida.

NOTIFÍQUESE



GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ
JUEZ

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado No. 75_, fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las 8 am

Envigado, octubre 7 del 2020



Tatiana Corrales Ramírez
Secretaria